

21 de la Constitución, y que el quejoso cree violadas en su persona, con los procedimientos de la Jefatura Política de Purísima del Rincón.

2º Que la Justicia de la Unión ampara y protege al mismo Ventura Ortiz, contra la sentencia de muerte que la expresada autoridad pronunció contra él, en 19 de Abril de 1872.

Notifíquese este fallo á las partes; publíquese en el *Periódico Oficial*; y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos legales.

Así el C. Lic. Albino Torres, Juez de Distrito del Estado, juzgando definitivamente lo decretó y firmó. Doy fé. — *Albino Torres.* — *Luis G. Medina.*

Es copia que certifico.

Guanajuato, 20 de Noviembre de 1874.  
— *Luis G. Medina*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero 17 de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado del Distrito de Guanajuato por Ventura Ortiz, contra los procedimientos del Jefe Político de Purísima del Rincón, que lo ha juzgado y sentenciado á sufrir la pena de muerte como salteador, aplicándole la ley de 18 de Mayo de 1871, con violación de las garantías que consignan los arts. 20, 21 y 23 de la Constitución Federal; y

Considerando: que en la causa instruida contra Ventura Ortiz, la cual obra en estas actuaciones, no existen las pruebas necesarias para poder considerar al quejoso como salteador de caminos.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 18 de Noviembre del año pasado, y se declara: que la Justicia de

la Unión ampara y protege á Ventura Ortiz, contra los procedimientos y sentencia del Jefe Político de Purísima del Rincón, quedando consignado el quejoso á la autoridad judicial respectiva.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. — *José M. Iglesias.* — *M. Auza.* — *Ignacio Ramírez.* — *Ignacio M. Altamirano.* — *L. Velazquez.* — *M. Zavala.* — *José García Ramírez.* — Certifico: que los CC. Ministros Juan J. de la Garza y Simón Guzmán, intervinieron en la votación de este amparo, y que por haberse ausentado de esta capital el primero, y estar imposibilitado de firmar el segundo por causa de enfermedad, no aparecen sus respectivas firmas en la anterior sentencia.

México, Abril 5 de 1875. — *Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 5 de 1875. — *Enrique Landa*, Oficial mayor.

## CAUSA

*Instruida en el Juzgado de Distrito de Michoacan, contra D. José M. Portugal y D. Severiano Bernal, por el delito de peculado el primero y complicidad en el mismo delito el segundo.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez de Distrito.

De las constancias de esta sumaria instruida contra D. José M. Portugal y D. Severiano Bernal, por el delito de peculado, aparece plenamente justificado que el primero como Administrador de rentas de la

Piedad, dispuso sin autorizacion alguna, de la suma de seis mil quinientos ochenta pesos, pertenecientes á las rentas federales, y que el segundo no impidió semejante abuso con su carácter de visitador, siendo que cuando se encontraba él mismo en la Piedad, dispuso Portugal de la cantidad de dos mil seiscientos sesenta y seis pesos, ocho centavos, que se halla comprendida en la anterior. Tales son los cargos que resultan á los responsables, y al formularlos en su contra este Ministerio, pide que en uso de la facultad que concede la ley 3ª, tít. 31, part. 7ª; se imponga al primero un año de prision, y la mitad de esta pena al segundo por la complicidad que lo resulta, declarándose juntamente que la cantidad ocupada, debe reintegrarse con fondos del Estado, supuesta la insolvencia de los culpables y el haber sido nombrado Portugal Administrador de rentas de la Piedad, sin exijírsele la fianza respectiva, segun aparece del informe que se registra de la foja 43 á la 44.

Morelia, Enero 12 de 1871.—*N. Cabañero.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Morelia, Mayo 4 de 1871.

Vista esta causa instruida contra José M. Portugal y Severiano Bernal, por el delito de peculado el primero, y complicidad en el mismo del segundo; las diligencias del sumario; la confesion con cargos hechas á los reos, y sus respuestas; lo alegado por sus defensores y pedido por el C. Promotor; la citacion para sentencia y cuanto mas ver convino; y

Considerando: que el cargo hecho á los reos es, á Portugal de *peculado*, y á Bernal, de complicidad en el mismo delito; que el hecho en que se fundó el de aquel, consiste en haber ocupado la cantidad de seis mil quinientos ochenta pesos, de las rentas federales, en los meses corridos desde 18

de Agosto de 1867 á 15 de Abril de 1869, en que estuvo al frente de la oficina de rentas de la Piedad, con el carácter de Administrador: que este hecho está plenamente probado en el proceso, tanto por la liquidacion de fs. 36 y por la declaracion é informe del C. Tesorero General del Estado, de fs. 39 y 42, como por haber el responsable reconocido aquella suma en las diligencias de fs. 45 vta. y 47, lo que constituye la confesion expresa y espontánea del delito: que la excepcion alegada por Portugal, de no haber dispuesto de los fondos del Erario Federal en provecho propio, sino en atenciones del Estado, además de no estar probada del todo, no destruye la existencia del delito de peculado, pues tanto el art. 15 de la ley de 16 de Diciembre de 1861 como la real cédula de 14 de Marzo de 1807 y el real decreto de 17 de Noviembre de 1799, hacen responsables de este delito no solo á los que hurtan para sí los fondos expresados, sino aún á los que los distraen de los fines á que están destinados por la ley, pues el decreto de 5 de Mayo de 1764, declara á los que administran caudales públicos, *verdaderos regulares depositarios* de ellos, con expresa prohibicion de invertirlos en otros objetos de los que están destinados.

Considerando así mismo, que el hecho que funda el cargo de complicidad hecho á Bernal, consiste en no haber impedido éste la ocupacion de dos mil seiscientos sesenta y seis pesos nueve centavos que hizo Portugal, en el tiempo que el primero estuvo de visitador en la Piedad, habiendo sabido y presenciado la ocupacion; cuyo hecho está plenamente probado con las comunicaciones de fs. 1 y 3, careo de fs. 28, declaraciones de fs. 41, informe del Gobierno de fs. 43, diligencias de fs. 45, en que Bernal reconoce la suma dicha, y su confesion de fs. 48; que la circunstancia sola de no haber impedido la ocupacion, lo hace cómplice de ella, en el precepto expreso de la real cédula citada, el del art. 15 de la

ley de 16 de Diciembre de 1861 y el de la 18, tít. 14, part. 7º.

Considerando, en fin: "que tanto la ley 2, tít. 8º, lib. 9 de la Recopilación, como el decreto y cédula reales citadas, constituyen responsables pecuniariamente y obligan al pago de las cantidades ocupadas por los empleados inferiores, á los superiores, incluso los Intendentes, cuyo carácter representan hoy los Gobernadores de los Estados, en aquellas palabras....."ni tampoco los contadores de provincia que deben intervenir las arcas, los Intendentes y Subdelegados que deben presenciar estos actos, ni los administradores y oficiales mayores, interventores, *los cuales han de tener iguales responsabilidades en la parte pecuniaria*," que de autos consta que ni Portugal ni Bernal tienen bienes propios con que responder, ni el primero tenía caucionado su manejo y solo se le embargaron ciento ochenta y cinco pesos, setenta centavos que por alcances debía percibir como administrador de la renta del papel sellado, y que están en depósito en la administración principal del ramo.

Por todas estas consideraciones y en fundamento de las leyes antes citadas; y haciendo uso del arbitrio de la 8ª, tít. 31, part. 7ª; como pide el C. Promotor. Se condena á D. José M. Portugal, á la pena de dos años de presidio y á D. Severiano Bernal, á la mitad de la misma pena, contada desde la fecha del auto motivado de prisión, por el delito de peculado en el uno y de complicidad en el otro: á ambos á la pena de destitución de los empleos que obtengan, y á la de quedar inhabilitados para obtener otros del servicio de la federación, dejando á salvo los derechos del Erario federal para que repita contra la Tesorería General del Estado por toda la cantidad que importa el descubierta de Portugal, deducida la de ciento ochenta y cinco pesos setenta centavos que se abonarán á aquella por cuenta de éste.

Hágase saber y remítase la causa al Tri-

bunal de Circuito para su revisión, y copia de este auto y del pedimento fiscal á la Suprema Corte. Definitivamente juzgando lo decretó el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacán. Doy fé.—*Gabino Ortiz.*—*Isidro Aleman.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.*

C. Magistrado del Superior Tribunal de Circuito.

El Promotor fiscal dice: que en la presente causa consta de una manera indudable que D. José María Portugal ocupó la cantidad de 6,580 pesos de las rentas federales, en los meses corridos desde 18 de Agosto de 1867 á 15 de Abril de 1869. Lo que no consta ni aparece en los autos, es, si convirtió en usos propios esa suma, ó la prestó con la calidad de reintegro para el pago de las fuerzas y otras atenciones del Estado de Michoacán de Ocampo, que estaban en el Distrito de la Piedad. En resumen no está patente en la causa, si obró el reo dañable torpeza ó refinada malicia. Así lo confiesa el C. Juez de Distrito en su sentencia, cuando dice: "que la escepcion alegada por Portugal de no haber dispuesto de los fondos del Erario federal en provecho propio, sino en atenciones del Estado, además de no estar probada del todo, no destruye la existencia del delito de peculado" (fs. 65 vta.) No es igual la pena que deba imponerse á Portugal en el caso de haber tomado para sí las rentas federales, que en el de haberlas confundido con las del Estado. Los informes del Tesorero de Michoacán, que obran á fs. 39 y 43 de la causa, son insuficientes para probar el descubierta en que con respecto al Estado pueda encontrarse Portugal, y así lo confiesa el mismo Tesorero, cuando dice; refiriéndose á éste: "pero es dudoso que haya invertido ambas cantidades en atenciones del Estado, porque los documentos de pago de

ellas, que remitió á esta Tesorería, no alcanzan á cubrir el cargo que le resulta por ingresos de rentas del Estado, en las cuales sale descubierto, y porque al hacer dicha remesa ningun valor destinó al reintegro de lo ocupado á las rentas federales.» (fs. 43.)

Aun cuando aparece que á la Tesorería General del Estado ha enviado 55.510 pesos 82 centavos, en documentos de descargo el referido Portugal, no existe en autos el cargo respectivo desde 18 de Agosto de 1867 hasta 15 de Abril de 1869. En consecuencia no puede averiguarse actualmente la diferencia de valores entre el cargo y la data.

En vista de éstas consideraciones, el fiscal pide: se devuelva ésta causa al inferior para que se sirva exigir á la Administracion de rentas de Morelia ó Tesorería General del mismo Estado, las cuentas remitidas por D. José María Portugal como Administrador del Distrito de la Piedad, en copia certificada por la misma oficina; abrazando desde 18 de Agosto de 1867 hasta 15 de Abril de 1869; así como tambien copia del expediente de visita que practicó D. Severiano Bernal: para que pida informe á la misma Administracion sobre el sueldo y emolumentos que disfrutaba el acusado: para que amplíe su declaracion á éste, sobre los gastos que mensualmente hacia en su persona y familia si la tuviere; así como sobre las cuentas corrientes que hubiere llevado en las casas de comercio de la Piedad: para que libre exhorto al Juez de primera instancia á que corresponda el Distrito rentístico de la Piedad, á fin de que examine tres testigos vecinos del lugar sobre los gastos probables que mensualmente hiciera Portugal, y exija de las principales casas de comercio de esa poblacion copia de la cuenta corriente que llevara Portugal durante su permanencia en la Piedad; para que proceda á la ratificacion de los nuevos testigos que declaren, haciéndoselo saber su nombre y señas á los acusados para que manifiesten si tie-

nen tacha que ponerles: para que las cuentas que exhibieren Portugal y Bernal, las reconozcan, haciendo extensivas á éste las mismas diligencias relativas al primero, para averiguar si fué ó no intercedida la conducta que observó con su cómplice. Practicadas estas diligencias, devuelta que sea la causa por el C. Juez de Distrito, el que suscribe podrá pedir sobre lo principal.

Querétaro, Agosto 4 de 1871.—*Luis Castañeda.*

*Otro pedimento del C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.*

Ciudadano Magistrado del Supremo Tribunal de Circuito.

El Promotor fiscal dice: que ha vuelto á examinar esta causa seguida de oficio contra D. José María Portugal y D. Severiano Bernal, por descubierto en las rentas de la federacion que estuvieron á cargo del primero como Administrador de rentas de la Piedad, y en las que tuvo ingerencia el segundo como visitador de la Administracion referida. Para el que conozca, aunque sea sin profundizarlo, nuestro sistema de recaudacion, no parece extraño que un recaudador de contribuciones de un Estado, tenga que ver con las rentas federales; pues por regla general tienen el encargo de cobrar el veinticinco por ciento adicional que sobre toda contribucion de un Estado corresponde á la federacion, los empleados de Hacienda de los mismos Estados. La ley de 16 de Diciembre de 1861, prohibe bajo penas severas la ocupacion de rentas federales, á fin de que se guarden y concervan con la debida separacion de la de los Estados.

En la causa presente, aparece que durante la visita que se le hizo al Administrador de rentas de la Piedad, D. José María Portugal; hubo un déficit de seis mil quinientos ochenta pesos, pertenecientes á las rentas federales. El procesado dice haber

dispuesto de esa suma para diversas atenciones del Estado de Michoacan de Ocampo, con calidad de reintegro. Así es que segun sus excepciones, éste es responsable á la federacion de esa suma (fs. 47 y 48.)

Segun la liquidacion que obra á fs. 82, aparece: que el deficiente que tuvo Portugal en su Administracion aciende á ocho mil quinientos setenta y nueve pesos, cinco cs. La diferencia consiste, entre esta cuenta y la del visitador, en que el último le ha pasado en data á Portugal cantidades, sobre las que, no existe noticia en la Tesorería de Michoacan. En esa misma liquidacion se ve, que de setenta y siete mil ochocientos treinta y siete pesos, que forman el cargo, con veinte y dos centavos más; nueve mil trecientos trece pesos, setenta centavos, son de la cuarta parte adicional que pertenece á la federacion; y diez y seis mil novecientos noventa y nueve, tambien son de la federacion, por haberlos recibido Portugal en pagarés de su antecesor Rubio: siendo el completo, hasta la suma predicha, de las rentas del Estado.

Examinando el descargo, se viene en conocimiento, de que el acusado envió las siguientes partidas á la Tesorería, por cuenta de la federacion:

1ª La de doscientos cuarenta y nueve pesos, del ramo de alcabalas:

2ª La de tres mil ochocientos diez y siete pesos, ochenta y dos centavos, del ramo de contribuciones.

3ª La de tres mil novecientos cuarenta y un pesos, setenta y cinco centavos, que devolvió en pagarés. Resulta de esta, que no es efectivo que Portugal no llevara con debida separacion las cuentas de la federacion y del Estado, supuesto que remitía al último cantidades de la primera. Por lo demás, la impericia en casos como éste no excusa; y así aun cuando la hubiera habido, no podia considerarse como razon que militara en favor del acusado.

Mas la existencia de esa falta de conocimientos en el ramo de hacienda que se

TOMO VII—PARTE II.

quiere hacer valer, viene por tierra cuando se lee el documento que obra á fs. 87.

En efecto, allí están considerados los pagos hechos á fuerzas de la federacion y los mandados hacer por el Estado: allí están cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y dos pesos, cuarenta y nueve centavos, que en documentos remitió Portugal á la Tesorería; y que están considerados en la cuenta general de fs. 82.

A fs. 88 se registran once mil doscientos setenta y ocho pesos, treinta y ocho centavos, de diversos pagos hechos por cuenta del Estado de Michoacan, y enviados á su Tesorería en recibos por Portugal. Están ya considerados en la cuenta general de cargos y data á fs. 82. De su exámen y sus respectivos comprobantes, se deduce que Portugal no ha podido justificar la inversion de la suma que aparece en su contra.

Si en vez de tomar como punto de partida los datos que existen en la Tesorería, nos referimos al expediente de visita, los resultados no son por eso mas satisfactorios para el procesado.

La liquidacion que formó el visitador á D. José M. Portugal, Administrador de rentas de la Piedad, comprende el movimiento de caudales que ha habido en esa oficina desde el dia 18 de Agosto de 1867, en que se recibió de ella, hasta el 15 de Setiembre de 1868 en que dió principio el año fiscal. El cargo aciende á sesenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos, veinte centavos, y la data á doce mil setecientos setenta y nueve pesos, ochenta y un centavos. Apareció desde luego una diferencia de cincuenta y cinco mil quinientos diez y ocho pesos, treinta y nueve centavos, en contra de Portugal (fs. 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92.)

Basta leer la lista de las existencias que quedaron por descubrir, para convenirse que el déficit apareció en todos los ramos, aunque después ha sido cubierto en su mayor parte, por los documentos de pa-

go y pagarés que devolvió Portugal. En efecto, requerido por el visitador para manifestarse la causa de tan enorme desfalte en el término ya prefijado: presentó como data, un índice de documentos que no había aún remitido á la Tesorería, y otro de pagarés que aun quedaban por cobrar en la oficina; sin exhibir otra constancia mas de pago que dichos documentos. Así debidamente se le abonaron cuarenta y ocho mil ciento once peses, dos centavos, quedando reducido el descubierto á siete mil cuatrocientos siete pesos, treinta y tres centavos, (fs. 92.)

Se dió por segunda vez cuenta del resultado á Portugal, y en su vista, contestó:

1º Que no se le abonaron ciento sesenta y seis pesos, sesenta y seis centavos, valor de los sueldos del Juzgado de Letras, en Abril de 1868, (cuyos recibos presentó.)

2º Que así mismo no se le han tenido en cuenta, cincuenta y pico de pesos que en pagarés existían en las receptorías de Ecuandureo y Tanhuato.

3º Que tampoco se han considerado en la "data" los documentos de descargo existentes en la recaudación de Ecuandureo:

4º Que no se han puesto en la cuenta varias devoluciones que hizo, por cobros indebidos.

5º Que si consideradas estas partidas, no bastaron á cubrir el deficiente, es porque seguramente su antecesor D. Jesus Rubio no entregó los pagarés en la cantidad de que se le ha hecho cargo.

A esta diferencia de \$ 7,407 35 centavos, hay que agregar la cantidad de \$ 2,214 78 centavos que importa la primera partida de data por contribuciones, por proceder de acreditación hecha al C. Jesus Rubio en 16 de Agosto de 1867 y no á Portugal. Con esta nueva glosa, añadida á fs. 94 por el Tesorero del Estado de Michocan á la cuenta de visita, resulta elevarse el desfalte de Portugal á \$ 9,625 8 centavos. Así se explica la nota de la liquidación de fs. 82, en que dice ser mayor la diferencia de la

cuenta formada en la visita; cuando como hemos visto, es en realidad menor.

Los pagarés de Rubio, eran del Estado de Michocan. El deficiente por data á la Hacienda Federal, se ha fijado en \$ 6,580. Por lo expuesto se ve: que cuando D. Severiano Bernal, vino á concluir su visita, existía un desfalte de \$ 9,000 ó cuando menos de \$ 8,000: que para cubrirlo, se tomaron, no rentas federales, sino rentas tomadas de una caja en que no había separación; rentas tomadas de una oficina en que no había libro de caja, (fs. 93.)

Que el Estado haya héchose pago bajo de su responsabilidad sin repartir á prorrata el *déficit*, es un derecho al que coadyuvó sin duda Bernal; pero que nunca pudo evitar cuando eran acreedores, igualmente la Federación y el Estado, y cuando éste administraba inmediatamente los fondos reunidos por medio de sus agentes. Con todo, no puede excusarse el visitador de la responsabilidad que le impone el art. 15 de la ley de 16 de Diciembre de 1861.

Supuesta la existencia del cargo que le resulta á D. José María Portugal, no importa averiguar, si no es para reagravarlo, si convirtió en usos propios ó en beneficio del Estado, la suma en que ha quebrado. Habiendo sido sin efecto las pesquisas hechas en el primer sentido y descubriéndose por la lectura del expediente de visita el desorden con que administraba el procesado, quien ni llevaba el libro de caja respectivo ni cuidaba de recaudar lo que sus subalternos recogían, ni aun siquiera exigía á veces documentos de pagos ó devoluciones que hacia: parece probable que el acusado no convirtió á sus usos los dineros del erario público. Mas ésta probabilidad, no destruye en manera alguna el hecho capital de este procedimiento, á saber, la falta de los caudales referidos: hecho probado, que no puede destruirse por otro presunto.

Por lo demás, por varias Reales Cédulas, está dispuesto: que los administradores no



hagan uso de los caudales de la Hacienda pública, los cuales han de permanecer depositados en las arcas, en las mismas especies en que se reciben; que si alguno usare de ellos, aunque llegue á apurarlos, se le ha de privar de oficio, y declarar inhábil para obtener otro; *que si hay destubierta y no le reintegra, se le imponga la pena de presidio desde dos hasta diez años, segun las circunstancias, sin que por dimanar la quiebra de omision ó de infidelidad de criados, haya de disminuir la pena.* (Reales Cédulas de 5 de Mayo de 1764, de 17 de Noviembre de 1790, y de 22 de Julio de 1768.)

En vista de lo cual, el Promotor fiscal pide: se confirme por sus propios legales fundamentos, la sentencia de primera instancia, por la que fueron condenados D. José María Portugal y D. Severiano Bernal, á las penas de dos años de presidio y uno de reclusion respectivamente, y declarados inhábiles para obtener empleos de la federacion, quedando á salvo los derechos de la hacienda federal contra el Estado de Michoacan para el reintegro de la suma ya indicada.

Querétaro, Noviembre 22 de 1871.—*Luis Castañeda.*

Es copia que certifico. Querétaro, Enero 29 de 1875.—*Ramon Reynoso, secretario.*

#### *Sentencia del Tribunal de Circuito.*

Querétaro 4 de Enero de 1874.

Vista la presente causa instruida de oficio contra José M. Portugal y Severiano Bernal, por delito de peculado el primero y complicidad en el mismo delito el segundo: sus preparatorias, confesiones con cargos, lo pedido por el C. Promotor, lo alegado por sus defensores en 1ª instancia, la sentencia que se revisa pronunciada por el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan, lo alegado en esta instancia por sus defen-

sores, pedimento del C. Promotor, la citacion para sentencia, con cuanto mas verse y tenerse presente convino.

Considerando: que respecto de Severiano Bernal, por haber fallecido segun consta en la causa, no tiene lugar la revision en la parte en que lo comprende la sentencia de 1ª instancia por el principio general *mors omnia solvit*, y por lo mismo debe sobrescarse, arts. 253 y 255 del Código penal.

Considerando: que el cuerpo del delito en cuanto á José M. Portugal por el delito de peculado, ocupando la cantidad de seis mil quinientos ochenta pesos de las rentas federales, en el tiempo que sirvió con el carácter de Administrador de rentas de la Piedad, y fué desde diez y ocho de Agosto de 1867 á 13 de Abril de 69, está plenamente justificado por la liquidacion de fs. 36 de la causa respectiva, por la declaracion é informe del C. Tesorero General del Estado de Michoacan, fs. 39 y 43, así como tambien el reconocimiento que el responsable hizo de aquella suma, fs. 45 vta. y 47, cuyo reconocimiento es una confesion expresa y espontánea, la que basta para castigar segun la ley 2ª tit. 13, par. 3ª, que si bien el reo procura excepcionarse con que no dispuso de las rentas federales en favor propio sino en atenciones del Estado, ni lo ha justificado, y por lo mismo su confesion queda en toda su fuerza y vigor y no destruye la existencia del delito, principalmente si se atiende al art. 15 de la ley de 16 de Diciembre de 1861, y Real cédula de 14 de Marzo de 1807, Real decreto de 17 de Noviembre de 1790, que hacen responsables de este delito no solo á los que hurtan para sí los fondos expresados, sino aún á los que los distraen de los fines á que están destinados por la ley y el decreto de 5 Mayo de 1864, declaran á los que administran caudales públicos, verdaderos regulares depositarios de ellos, con expresa prohibicion de invertirlos en otros objetos de los que están destinados. Teniendo presente que

tanto la ley 2ª tit. 8º, lib. 9 de la Recopilacion, como el decreto y cédulas reales citadas, constituyen responsables pecuniariamente y obligan al pago de las cantidades ocupadas por los empleados inferiores á los superiores, incluso los Intendentes, cuyo carácter representan hoy el Gobernador de los Estados: atendiendo á que Portugal no tiene bienes propios con qué responder, ni causió su manejo, y que solo aparece en su favor ciento ochenta y cinco pesos setenta centavos, por alcances como Administrador de las rentas del papel sellado, la que está depositada en aquella administracion. El C. Ministro dijo: 1º Que debía de sobreseer y sobresee en la presente causa, respecto de Severiano Bernal. 2º Que debía de confirmar y confirma la sentencia de 1ª instancia en cuanto á José M. Portugal, que lo condena á dos años de presidio, los que se contarán desde la fecha del auto motivado de prision, destitucion de empleos que obtenga, é inhabilitacion para obtener otros del servicio de la federacion, dejando á salvo los derechos del Erario federal, para que repita contra la Tesorería General del Estado de Michoacan, por toda la cantidad que importe el descubierto de Portugal, deduciendo de ésta la de ciento ochenta y cinco pesos setenta centavos que se abonarán á aquella.

Hágase saber á quien corresponda, librese la ejecutoria respectiva y elévese la presente á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Así definitivamente juzgando y sentenciando lo decretó, mandó y firmó el C. Magistrado segundo suplente de este Tribunal de Circuito, Lic. Antonio Hernandez, actuando por receptoría por licencia del secretario. Doy fé.—*Lic. Antonio Hernandez.*—*Antonio Tejeda.*—*Francisco Guzman.*

Es copia que certifico. Querétaro, Enero 17 de 1875.—*Antonio Hernandez.*

*Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.*

El Procurador General interino dice: que este proceso se instruyó contra D. José M. Portugal, por el hecho de haber dispuesto contra las prescripciones de las leyes respectivas, de las rentas de la Federacion, recaudados en la Piedad, perteneciente al Estado de Michoacan, con el carácter de Administrador de rentas del expresado lugar, y contra D. Severiano Bernal, por el hecho de no haber impedido aquel abuso, como visitador de la misma oficina.

El fallo de 1ª instancia condenó al primero de los citados reos, en 4 de Mayo de 1871, á sufrir la pena de dos años de presidio, contados desde la fecha del auto motivado de prision, y además á la de destitucion de empleo, y á la inhabilitacion para obtener otros del servicio de la Federacion, quedando á salvo los derechos del Erario Federal, para repetir contra la Tesorería del Estado, por la cantidad que importa el descubierto del responsable. En la misma sentencia se condenó al segundo de los acusados D. Severiano Bernal, á un año de presidio y á la propia destitucion é inhabilitacion.

Este fallo, revisado en estado por el Tribunal de Circuito, á 4 de Enero último, fué confirmado en todas sus partes por lo que respecta al reo José M. Portugal, y en lo relativo al segundo de los acusados D. Severiano Bernal, se sobreseyó á causa de que este acusado falleció en Morelia, el 27 de Mayo de 1872.

Supuesto lo que va referido, la sentencia de que se trata ha causado ejecutoria, y el proceso ha venido á esa superioridad para los efectos del art. 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826.

El que suscribe no encuentra motivo alguno de responsabilidad en que hayan incurrido los funcionarios que entendieron en este proceso, y así pide á la Sala que se sir-



va declararlo; ordenando además, que se remita al Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y á efecto de que diere las providencias que crea oportunas, copia certificada de los fallos de 1ª y de 2ª instancia.

México, Febrero 15 de 1875.—Lozano.

*Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero 18 de 1875.

Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones, remítanse al Ministerio de Hacienda las copias á que se refiere el C. Procurador General, y archívese á su vez el Toa.—José M. Iglesias.—M. Auza.—Juan J. de la Garza.—Altamirano.—S. Guzman.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia. México, Febrero 22 de 1875.—Alejo M. Gomez Eguarte.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por el C. Juan N. Flores, contra la ocupacion de una parte de los terrenos de su hacienda de la Zarca, por el C. coronel Manuel Maya, que estableció en ella una tribu de indios kikapoos.*

C. Juez del Distrito:

El C. Jefe de Hacienda del Estado, encargado de llevar la voz fiscal, dice: que el C. Felipe Flores se queja de haberse violado en su persona las garantías que le otorgan los art. 16 y 27 de la Constitucion general de la República, con los procedimientos del C. Coronel Manuel Maya, en virtud de los cuales fueron puestos los indios kikapoos en posesion de terrenos situados en

el arroyo de Santo Domingo, pertenecientes á la hacienda de la Zarca, propiedad del quejoso.

El hecho de haber dado posesion á los indios kikapoos en el terreno cerca de Santo Domingo, nadie lo niega. El punto cuestionable consiste en que el Sr. Flores asegura ser de su propiedad el terreno ocupado por los indios, y el Sr. Maya manifiesta que pertenece á la hacienda de la Cadena, propiedad del Sr. D. Liborio Scijas.

Parece inconducente hacer declaraciones en este juicio sobre si el terreno en cuestion pertenece á la hacienda de la Zarca ó á la de la Cadena, supuesto que no es el objeto principal resolver esa cuestion, la cual se ventilaria tal vez en caso necesario ante diversa autoridad con diversos recados y con audiencia del dueño de la Cadena.

Para fundar opinion sobre el objeto que motiva este recurso, hasta esclarecer el punto sobre si el quejoso estaba en posesion del terreno ocupado por el C. Coronel Maya con los indios kikapoos.

Consta en autos comprobado plenamente con un competente número de testigos, que la hacienda de la Zarca, propiedad del quejoso, estaba en posesion del terreno en el cual han sido instalados los indios kikapoos, y que con tal motivo ha resentido gravísimos perjuicios la propia hacienda. De aquí resulta, que aun sin tocar la cuestion por lo relativo al derecho de propiedad, es manifiesta la violacion de la garantía que otorga el art. 16 de la Constitucion general, con el hecho de haber sido molestado el Sr. Flores en sus posesiones sin el previo mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento.

Fundado el Fiscal en los argumentos anteriores y en los arts. 101 y 102 de la Constitucion general de la República, pide al Juzgado se sirva conceder el amparo solicitado por el C. Felipe Flores contra los procedimientos del C. coronel Manuel Maya, en virtud de los cuales fueron instalados los